

MEXICO: FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL MONOPOLISTA

Ma. Irma MANRIQUE CAMPOS

No obstante que la inflación forma parte de la problemática del subdesarrollo latinoamericano, este fenómeno obliga a reflexiones cuando la magnitud del proceso toma fuerza, sobre todo en el ámbito interno. Es el caso que, desde los primeros meses del año, México se enfrenta a los efectos de una inflación aguda, cuya celeridad alcanza —según cálculo oficial— un 11% de enero a mayo (incremento que representa, tres o cuatro veces la tasa anual de años anteriores),¹ y que, en realidad y apreciado con criterio conservador en el momento actual, duplica este cálculo.

Resulta inobjetable que la inflación, como fenómeno que se origina en la estructura del sistema económico, ha adquirido en el seno del capitalismo monopólico de nuestros días, caracteres de intensidad creciente. En los países capitalistas europeos, Japón y Estados Unidos, se alcanzaron tasas de inflación que parecían reservadas al mundo en desarrollo; así por ejemplo, en Japón y Francia llegan al 11% anual y en los EUA, que desde agosto de 1971 aplica un programa antinflacionario, se registra una tasa de 6%.²

En esta amplia visión del capitalismo, donde el fenómeno inflacionario tiene verdadera dimensión internacional, es importante observar que la inflación en México no sólo representa la extensión del proceso más general, sino que se plantea con características propias,

¹ 3.7% a 1971 y 2.8% a 1972, según cifras del índice general de precios del Banco de México, S. A., publicadas en sus *Informes anuales*.

² Véase revista *Comercio Exterior*, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, número 8, volumen XXIII, agosto de 1973.

vinculadas estrechamente a las causas primarias del subdesarrollo y la dependencia.

Las fuerzas que generan el proceso alcista de los precios, subyacen en el plano estructural y se manifiestan, principalmente, en una gran rigidez de los sectores productivos, para más tarde propagarse a las esferas del intercambio, mediante la actividad de los factores monetarios y fiscales.

La inflación en nuestro país, ligada estrechamente a la inequitativa distribución de la riqueza, conlleva una dosis considerable de violencia, que provoca, en su desarrollo, una lucha interna de los grupos del poder económico, frente a un gobierno que ha intentado —según sus propios planteamientos—, reorientar la política económica en un sentido nacionalista y popular mediante:

- la nacionalización y mexicanización de algunas empresas importantes;
- la política de redistribución del ingreso;
- la reforma fiscal, que a pesar de ser tibia y de escaso alcance, se vio frustrada desde el principio, por el ambiente de abierta hostilidad creado por el sector empresarial, bloqueada y revertida hacia el consumidor (como en el caso del impuesto a los artículos de “lujos”); y, por todo ello, con pocas posibilidades como elemento de apoyo a la política redistributiva del ingreso;
- la expansión del sector gubernamental;
- la política de apoyo en la llamada “alianza popular” (que tomaría cuerpo en la unidad obrera en torno al régimen);
- la política exterior de acercamiento hacia países como Chile, Cuba y Tercer Mundo en general.

La rigidez de los sectores productivos: agropecuario e industrial, se origina en una serie de problemas acumulados. Así, la falta de elasticidad de la producción agropecuaria —principalmente alimentos—, es la suma de complejos problemas entre los que pueden mencionarse los del parvifundio, una organización defectuosa, falta de crédito, erosión de tierras, fuerza de trabajo subempleada, etc., lo cual redundará en una tasa de crecimiento del sector cada vez más reducida e incluso menor a la tasa de crecimiento de la población.

El alto costo de la industrialización por la vía capitalista —sustitución de importaciones—, frena el desarrollo de este sector y representa una carga sumamente onerosa, ya que la importación de maquinaria y tecnología necesarios para su expansión, así como la exportación de los productos a mercados dominados por los monopolios

(internacionales y mixtos), gravita sobre la capacidad de compra de la masa consumidora, eleva al mismo tiempo el costo de los demás sectores —sobre todo el agropecuario—, incrementa la magnitud de la supeditación externa y enfatiza el deterioro de la relación de los precios del intercambio en el ámbito internacional.

Aunado a la inflexibilidad de los sectores de la producción, se encuentra el bajo nivel de la inversión realmente productiva, en una estructura monopólica donde no se produce aquello que es necesario y lo que se produce es caro, (entre otras cosas porque deben cubrirse los costos originados en la existencia de capacidad instalada ociosa). Además, el grado de avance de estas economías monopolistas, ha determinado el crecimiento desproporcionado del sector improductivo (la burocracia y la publicidad, principalmente) el cual le confiere al proceso inflacionario un carácter permanente y trae a escena el fenómeno denominado “efecto-demostración”.

Este conjunto de factores generadores de inflación, se ve complementado por otros no menos dignos de ser tomados en cuenta. Por una parte se encuentra el sistema tributario regresivo, pues hay un especial cuidado de que los ingresos del gobierno no provoquen una baja en la tasa de ganancia por lo que se procura derivarlos, particularmente, del impuesto sobre los salarios y, muy marginalmente, de la renta del capital; y por otra, la orientación consuntiva del gasto público, pues se ha hecho inevitable que el gobierno, en la realización de sus programas trazados, genere nuevos empleos —y por consiguiente mayor demanda— de sectores improductivos.

Resulta en cierto modo paradójica esta lucha de juego de poder, donde el sistema permite que todos los elementos se unan para favorecer el sector capitalista, principalmente, a través del gobierno; éste, comprador masivo en condiciones muy favorables que garantizan al capital privado un mercado razonablemente estable, cuidadoso de no realizar servicios que son reservados para el sector privado, adopta un carácter paternalista al tomar a su cargo ciertos servicios que resultan útiles al propio desarrollo del capital, sin faltar desde luego, justificaciones teóricas para demostrar que el estado debe actuar así: realiza obras de infraestructura para ofrecer insumos baratos, construye viviendas populares, hospitales y escuelas, que en general representan inversiones deficitarias y despilfarra en gastos de turismo oficial, clientelas políticas, custodia de magistrados, publicidad, aparte de inflar al máximo todos los presupuestos; todo lo cual, aunque pretendidamente necesario para la gestión pública, sirven al capital privado, ya sea disminuyendo sus costos o bien aumentando sus ganancias.

La inflación se ve especialmente estimulada con esta actitud paternalista del gobierno, no, como se pretende³ hacia el asalariado —cuyas reivindicaciones aún están lejos de ser efectivas en medio de un nacionalismo que se ve constantemente limitado—, sino hacia el capitalista, quien se sirve de la inflación como un medio de fácil enriquecimiento y de aumento de poder.

Por la esencia misma del sistema, se crean áreas de choques y conflictos en las que son inevitables las reacciones subversivas del sector obrero empobrecido, cuyo nivel de subsistencia quizá encuentre reivindicación a través de la lucha sindical que casi nunca compensará el quebranto salarial, puesto que el sector capitalista siempre transferirá el aumento de la remuneración del trabajo a los precios.

La espiral inflacionaria que se produce, sufraga, como dice con toda verdad Malavé Mata: “la prédica, la diserción y el silencio... paga la concupiscencia del poder, los apetitos del sistema y... aumenta también las milicias del descontento.”⁴

La intranquilidad que se siembra, al acentuarse de este modo la disminución de los ingresos reales de la población, recae en forma directa sobre el gobierno, de manera que lo debilita y obliga a tomar cada vez con mayor frecuencia, una actitud de rectificación y concesiones.

El 25 de julio, el gobierno propone un “programa de acción inmediata contra la inflación” que, como medida de emergencia, ofrece tan solo paliativos temporales, ya que si se reconoce la existencia de problemas estructurales⁵ en los que el acaparamiento y la especulación de productores e intermediarios y la insuficiente inversión productiva, juegan un papel decisivo, los diecisiete puntos, sin embargo, se limitan a las esferas donde se difunde el proceso inflacionario y no se dirige hacia las verdaderas causas que lo originan: 1) medidas de “estabilización y ritmo” en el gasto público y astringencia monetaria y crediticia; 2) control y vigilancia en el comercio interno y ex-

³ A menudo, las declaraciones de la iniciativa privada son una crítica abierta a la actitud gubernamental, por ejemplo: *Excelsior*, 4 de septiembre de 1973, *primera plana*, donde el ingeniero Ernesto Barroso Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, en su discurso a los industriales, ataca particularmente al “paternalismo estatal”, debido a las medidas de emergencia dirigidas a socorrer circunstancialmente a los trabajadores afectados por la inflación.

⁴ Malavé Mata, Héctor, *La dialéctica de la inflación*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1972, p. 15.

⁵ Véase *El mercado de valores*, julio 30 de 1973, “Programa de acción inmediata contra la inflación”, discurso del licenciado José López Portillo, secretario de Hacienda y Crédito Público.

terno, para orientar al consumidor de manera que “amplie su conocimiento del mercado” y racionalización de la exportación de productos alimenticios y, en general, de aquellos considerados insuficientes para la demanda interna, así como subsidios al consumo mediante la expansión de las tiendas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); 3) política de precios, que regula la relación utilidades-salarios, en la búsqueda de beneficios al poder adquisitivo de los trabajadores con apoyo en el sistema de “comisiones tripartitas”.

La creación de estas comisiones tripartitas (formadas por el gobierno, la iniciativa privada y los representantes oficiales de los trabajadores) parece ser una de tantas “rectificaciones”, pues resulta contradictoria e irreconciliable por la heterogeneidad de sus componentes y donde la solidaridad y las causas comunes salvo la de los intereses del capital, no tienen fácil cabida.

La evidencia de que el poder económico del sector capitalista determina que el gobierno siga una política de “adaptación”, la encontramos cotidianamente; así, las recientes declaraciones del secretario del Patrimonio Nacional, de acuerdo con las cuales, algunas empresas públicas se transferirían al sector privado y se promovería la formación de empresas de carácter “mixto”; asimismo, el viaje por varios países europeos del secretario de Industria y Comercio, en el cual uno de los objetivos principales es el de “invitar” al capital extranjero para participar en la constitución de las mencionadas empresas mixtas.

Resulta sintomático que, al mismo tiempo, la Cámara de Diputados haga algunas “recomendaciones” al Ejecutivo respecto al exceso del 41% del Gasto Público durante 1972 (que por lo regular en este país no había sido mayor del 25%) respecto a lo programado, el cual hubo de realizarse sustancialmente debido al “escaso grado de dinamismo que tuvo la inversión privada”,⁶ y la justificación de tal exceso radicó en la necesidad de efectuar pagos de subsidios a todos los sectores, incluso al industrial y comercial.

Es evidente entonces, que la inflación, lejos de ser un fenómeno temporal y graduable, se encuentra constantemente reforzado y con pocas posibilidades para una solución de fondo, al tiempo que coadyuva al debilitamiento de cualquier atisbo de *populismo* en el gobierno, sin olvidar que en el ámbito latinoamericano hay algunos elementos importantes que también contribuyen a este debilitamiento, tales como el cambio en el ambiente político, el cual ha sufrido serios reveses en su lucha contra el imperialismo —y donde el caso chileno

⁶ *Excelsior*, 31 de octubre de 1973, *primera plana*.

resulta el más dramático—. La definición de la política continental norteamericana anunciada por el secretario de Estado, Kissinger: "*nacionalismo o cooperación*", da la pauta sobre la que se medirán los problemas y sobre la que el nacionalismo y formas socioeconómicas más avanzadas, no encuentran una salida factible, más aún si no se cuenta con una base política organizativa de lucha de los sectores populares, capaz de anteponer las necesidades primarias de la mayoría sobre la opulencia y el despilfarro de un sector minoritario que, no obstante su posición de dominio, no podrá impedir que, tarde o temprano, contra la violencia burguesa de los precios, se desate la violencia proletaria por la subsistencia.